



Negacionismo y austeridad: La doble guerra de la extrema derecha contra las universidades públicas en Brasil

TIAGO SOARES NOGARA

Centro de Investigación sobre la Historia del Mundo
Moderno y Centro de Estudios Latinoamericanos, Facultad
de Historia, Universidad de Nankai, Tianjin, China.

Resumen

El artículo analiza cómo el negacionismo y la austeridad se convirtieron en ejes articuladores de la ofensiva de la extrema derecha brasileña contra las universidades públicas durante el gobierno de Jair Bolsonaro. A través de recortes presupuestarios, intervenciones autoritarias y ataques simbólicos, la ciencia, la intelectualidad y las instituciones públicas de enseñanza se transformaron en blancos prioritarios de la “guerra cultural” impulsada por los sectores más reaccionarios del gobierno. Mientras esta ofensiva limitaba el presupuesto, la vitalidad y la expansión de las universidades públicas, forjó también las bases para que técnicos, profesores, estudiantes y amplios sectores de las clases medias —incluso con un sesgo conservador— se sumaran al campo democrático-popular en el amplio frente que derrotaría a la extrema derecha en las elecciones de 2022. En este sentido, el artículo no se limita a analizar el antagonismo entre la extrema derecha y la educación superior pública, gratuita y universal, sino que también lo inscribe en el marco más amplio de las disputas políticas y sociales del Brasil contemporáneo.

Palabras clave: extrema derecha, universidades públicas, negacionismo, austeridad, guerra cultural, Bolsonaro.

DOI: <https://doi.org/10.36888/udual.universidades.2025.106.860>

Negacionismo e austeridade: a guerra dobre da extrema direita contra as universidades públicas no Brasil

Resumo

O artigo analisa como foi que o negacionismo e a austeridade transformaram-se em eixos capazes de organizar uma ofensiva da extrema direita brasileira contra as universidades públicas durante o governo de Jair Bolsonaro. Através de cortes orçamentais, intervenções autoritárias e ataques simbólicos; a ciência, a intelectualidade e as instituições públicas de ensino tornaram-se em alvos prioritários da “guerra cultural” impulsada pelos setores mais reacionários do governo. Enquanto essa ofensiva limitava o orçamento, a vitalidade e a expansão das universidades públicas, forjou, a sua vez, as bases para que técnicos, professores, alunos e muitos setores da classe média -inclusive com um viés conservador- puderam incluir-se no campo democrático-popular, no grande frente que venceu a extrema direita nas eleições de 2022. Assim, o artigo não se limita à análise do antagonismo entre a extrema direita e o ensino superior público, gratuito e universal, também se inscreve no quadro mais amplo das disputas políticas e sociais do Brasil contemporâneo.

Palavras-chave: Extrema direita; Universidades públicas; Negacionismo; Austeridade; Guerra cultural; Bolsonaro.

Denialism and austerity: the far right's double war against public universities in Brazil

Abstract

The article analyzes how denialism and austerity became articulating axes of the Brazilian far right's offensive against public universities during Jair Bolsonaro's government. Through budget cuts, authoritarian interventions, and symbolic attacks, science, intellectual life, and public educational institutions became priority targets of the “culture war” driven by the most reactionary sectors of the government. While restricting the budget, vitality, and expansion of public universities, this offensive also laid the groundwork for technicians, professors, students, and broad sectors of the middle classes — even with a conservative bias — to join the democratic-popular field in the broad front that defeated the far right in the 2022 elections. In this sense, the article does not limit itself to analyzing the antagonism between the far right and public, free, and universal higher education, but places it within the broader framework of political and social disputes in contemporary Brazil.

Keywords: far right, public universities, denialism, austerity, culture war, Bolsonaro.

Introducción

En los últimos años, el ascenso y la masificación de liderazgos y movimientos políticos de extrema derecha se han convertido en una tónica en distintas partes del mundo. En América Latina, gobernantes como Jair Bolsonaro y Javier Milei despuntan como algunos de los principales exponentes de este proceso que, emulando a sus pares de los países del Atlántico Norte, exhiben puntos en común –especialmente su hostilidad hacia las universidades y la intelectualidad en general– atacando, tanto a sectores progresistas como a partes del pensamiento conservador, en el marco de un discurso de apariencia “antisistémica”. Un análisis más denso de cómo estos gobiernos han movilizizado, en sus respectivos contextos nacionales, la llamada “guerra cultural” contra las instituciones de educación superior, contribuye de manera decisiva a comprender las dinámicas ideológicas que los han acompañado.

En el caso brasileño, la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia y la difusión de una visión de mundo alineada con la extrema derecha estuvieron directamente asociadas a la intensificación de los ataques simbólicos e institucionales contra las universidades públicas. Ese ideario articulaba una crítica agresiva al cuerpo docente y estudiantil, sostenida por acusaciones de hegemonía “izquierdista” y por la retórica de la “adoctrinación marxista” que, supuestamente, contaminaría la producción científica nacional. Aunque impulsado con nuevo vigor durante el gobierno de Bolsonaro, ese discurso remonta a narrativas reaccionarias que, desde la primera década de los 2000, ya venían oponiéndose a las políticas de democratización del acceso a la educación superior promovidas por los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT).

Durante el breve gobierno de Michel Temer (2016-2018), se pusieron en marcha las primeras medidas para dismantelar los avances logrados a lo largo de las gestiones petistas, aunque con menor contundencia. Ya bajo Bolsonaro (2019-2022), estas directrices adquirieron mayor nitidez y radicalidad, adoptando la forma de un enfrentamiento sistemático no sólo contra las políticas públicas educativas anteriores, sino contra las propias bases de sustentación de las universidades públicas. Este enfrentamiento se manifestó mediante la descalificación del saber científico, recortes expresivos en la inversión en educación superior, intentos de debilitar la autonomía universitaria y la promoción de una retórica que criminaliza el pensamiento crítico.

Este artículo analiza dicho proceso en tres momentos. En primer lugar, traza las principales transformaciones asociadas al fortalecimiento y democratización de las universidades públicas a lo largo de los gobiernos petistas, así como las reacciones conservadoras que tales avances suscitaron y que pasaron a influir en el debate político nacional. En segundo lugar, examina cómo la extrema derecha brasileña instrumentalizó este descontento para construir su discurso y abrirse camino hacia el poder. Finalmente, discute los impactos de estas dinámicas en la adopción, por parte del gobierno de Bolsonaro,

de una agenda orientada por la austeridad fiscal, el privatismo y el negacionismo científico, aplicada con especial intensidad a las instituciones públicas de educación superior. Si bien tales acciones contribuyeron a dar cohesión ideológica a la ofensiva cultural de la extrema derecha, también estimularon la emergencia de un frente amplio de resistencia en el ámbito universitario, con un papel decisivo en el resultado de las elecciones presidenciales de 2022.

Las transformaciones de la educación superior durante los gobiernos de Lula y Dilma

El PT, fundado en 1980, nació como consecuencia de una ola de ascenso del movimiento obrero brasileño a fines de los años setenta. Congregó liderazgos del “nuevo sindicalismo” surgido de las huelgas del ABC paulista –entre los cuales Luiz Inácio Lula da Silva era el más destacado–, remanentes de la lucha armada contra la dictadura militar, intelectuales de distintas corrientes y movimientos sociales vinculados al catolicismo progresista y a la teología de la liberación. En poco tiempo, se convirtió en el principal partido de izquierda del país, con Lula alcanzando el segundo lugar en las elecciones presidenciales de 1989, 1994 y 1998.

Cuando finalmente ganó las elecciones en 2002, el PT ya había moderado parte de sus posiciones históricas. Si en los años ochenta defendía banderas avanzadas y socializantes como una amplia reforma agraria, estatizaciones masivas y profundas medidas de redistribución de renta, en 2002 Lula fue elegido mediante una amplia alianza, con apoyo de fracciones de la burguesía industrial brasileña y del capital financiero internacional. La “Carta al pueblo brasileño”, divulgada en vísperas del pleito, sellaba ese pacto al garantizar el mantenimiento de los fundamentos macroeconómicos heredados de los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso.

A pesar de dicha inflexión hacia la moderación, los dos primeros mandatos de Lula (2003-2010) estuvieron marcados por un fuerte crecimiento económico y políticas de reducción de la pobreza. El país salió del mapa del hambre, se consolidó como una de las mayores economías del mundo –llegó al sexto lugar en 2011– y se convirtió en un actor central en la lucha por un orden mundial multipolar. En el plano interno, el PT no rompió directamente con los grandes intereses de las clases dominantes brasileñas, optó por construir una estrategia electoral y de gobernabilidad basada en amplias coaliciones y alianzas heterogéneas. Cuando, en el segundo mandato de Dilma Rousseff, intentó tensionar, aunque fuera mínimamente ese pacto, enfrentó una dura resistencia de los grandes medios corporativos y de las élites económicas, lo que culminó en la aprobación del *impeachment* en 2016, así como en la posterior prisión ilegal y arbitraria de Lula, que le impidió postularse en 2018.

Uno de los sectores más transformados por las políticas públicas de los gobiernos del PT fue el de la educación, especialmente la educación superior. Durante los gobiernos de Lula y Dilma, el presupuesto del Ministerio de Educación (MEC) se triplicó, pasó de 49.3 mil millones BRL (reales brasileños) en 2002 a 151.7 mil millones BRL en 2015. Sólo durante el gobierno de Dilma, las

inversiones en educación superaron en 54 mil millones BRL el piso constitucional. La creación del Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica y de Valorización de los Profesionales de la Educación (FUN-DEB), en 2006, permitió una ampliación significativa de las transferencias federales al sector, que pasaron de 3.9 mil millones BRL ese año a casi 16 mil millones BRL en 2015 (Instituto Lula, 2025; PT, 2021).

En la educación superior, los avances fueron notorios. La red federal se amplió con la creación de 18 nuevas universidades y 178 nuevos campus. Esta expansión no fue solo cuantitativa, sino territorial. Con la interiorización de la educación superior, regiones históricamente excluidas –como el semiárido nordestino, el interior amazónico y zonas rurales del Centro-Oeste– pasaron a contar con instituciones federales, democratizando el acceso al conocimiento e impulsando el desarrollo local.

Otro eje central fue el Programa de Apoyo a los Planes de Reestructuración y Expansión de las Universidades Federales (REUNI), creado en 2007, que incentivó a las instituciones a ampliar plazas, cursos y turnos, con especial énfasis en la oferta nocturna. Con el REUNI, se buscaba ampliar el número de estudiantes sin comprometer la calidad, exigía metas como la reducción de la deserción, el aumento de la relación alumno-profesor y la expansión de los posgrados. El programa desempeñó un papel crucial en la incorporación de nuevos segmentos sociales a las universidades, además de modernizar la infraestructura física y tecnológica de las instituciones.

Asimismo, los gobiernos petistas fortalecieron programas de permanencia estudiantil, como el Plan Nacional de Asistencia Estudiantil (PNAES), creado en 2008. Con él fue posible ampliar el acceso a residencias estudiantiles, comedores universitarios, becas y ayudas que garantizaran condiciones mínimas para la permanencia de estudiantes de bajos ingresos. Esta política fue decisiva para consolidar la transformación del perfil socioeconómico del cuerpo estudiantil. Si en 2003 la universidad pública estaba mayoritariamente ocupada por estudiantes de las capas medias y altas, a fines de 2015 más del 60% de los estudiantes de las instituciones federales declaraban provenir de familias con renta per cápita de hasta 1.5 de salario mínimo (ANDIFES, 2016).

Paralelamente, dos políticas de gran impacto ayudaron a impulsar el acceso a la educación superior en el sector privado: el Programa Universidad para Todos (PROUNI), creado en 2004, y el nuevo modelo del Fondo de Financiamiento Estudiantil (FIES), reformulado en 2010. El PROUNI ofrecía becas parciales e integrales para estudiantes de bajos ingresos en instituciones privadas, condicionadas al desempeño en el Examen Nacional de Enseñanza Media (ENEM). Por su parte, el nuevo FIES permitía financiar casi íntegramente las mensualidades, con intereses bajos, volviéndose atractivo para millones de estudiantes. Aunque estos programas beneficiaron a conglomerados educativos privados, también contribuyeron a la masificación de la educación superior y al acceso de estudiantes históricamente excluidos.

En el campo de la equidad social, se destaca la Ley de Cuotas (Ley núm. 12.711/2012), sancionada por Dilma Rousseff, que estableció la reserva del 50% de las vacantes en universidades e institutos federales para estudiantes de escuelas públicas, con recortes por renta y etnicidad. Esta medida generó una

fuerte resistencia de sectores conservadores, pero terminó por ser consolidada como política de Estado, es decir, fomentó una significativa inclusión de jóvenes provenientes de familias pobres en la educación superior.

En términos generales, las matrículas en la educación superior se duplicaron entre 2002 y 2015, pasaron de 3.52 millones a 8.03 millones BRL (INEP, 2016; CNTE, 2022). Las universidades públicas –sobre todo las federales– fueron incorporadas a una estrategia gubernamental que veía en la ampliación del acceso y en la cualificación de la formación superior un eje fundamental del desarrollo nacional. Este proceso impactó también en los posgrados, con el crecimiento de los programas de maestría y doctorado, iniciativas de internacionalización y valorización de los investigadores, a través de la Coordinación de Perfeccionamiento del Personal de Nivel Superior (CAPES) y el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq).

Entre los programas destaca “Ciencia Sin Fronteras” creado en 2011 para fomentar la formación académica en el exterior, con foco en las áreas de ciencia, tecnología e ingeniería, a través del cual posibilitó que miles de estudiantes cursaran estudios en universidades extranjeras de excelencia. A este conjunto se sumaron el aumento de becas de posgrado, el perfeccionamiento de la evaluación institucional y la creación de institutos federales, que expandieron la oferta de educación técnica y superior en regiones antes desatendidas. Estas medidas consolidaron el papel de las instituciones públicas de enseñanza como pilares de un proyecto nacional inclusivo y, por eso mismo, pasaron a ser objeto creciente de la reacción conservadora que ganaría fuerza en los años siguientes.

Finalmente, cabe destacar el papel simbólico y político de esta transformación. Durante mucho tiempo, elitizadas y alejadas de la realidad de la mayoría de la población brasileña, las universidades públicas pasaron a incorporar a jóvenes provenientes de los sectores más desfavorecidos. Esto produjo un cambio cultural profundo, con impactos en la producción de conocimiento, en las prácticas pedagógicas y en la composición de los cuerpos estudiantil y docente. Al mismo tiempo, tal proceso generó reacciones conservadoras, tanto en las élites como en parte de la clase media, que pasó a ver a las universidades como espacios “ideologizados” y víctimas de una supuesta “adoctrinación marxista”. Estas reacciones serían más tarde instrumentalizadas por el discurso de la extrema derecha, particularmente durante la campaña electoral de 2018 y el gobierno de Bolsonaro, aunque ya habían tenido importante repercusión durante el proceso de desestabilización de los gobiernos de Dilma, especialmente a partir de junio de 2013.

Fundamentos de la reacción conservadora

Las reformas de la educación superior impulsadas por los gobiernos petistas alteraron el perfil promedio del estudiantado universitario brasileño y fortalecieron la capacidad presupuestaria de las universidades públicas. Paralelamente, contribuyeron a la reestructuración del debate existente en el país sobre los rumbos de la educación superior, con nuevas y viejas agendas que revitalizaron los posicionamientos políticos de diversos sectores de la sociedad brasileña.

En el ámbito universitario, cierto sector de los sindicatos docentes y del movimiento estudiantil, vinculado a la “oposición de izquierda” de los gobiernos del PT, mantuvo una crítica constante a programas como el REUNI, el PROUNI y el FIES. En sus evaluaciones, la expansión de las universidades públicas bajo el signo del REUNI no habría venido acompañada de una mejora proporcional en sus capacidades para absorber tal aumento de ingresos, lo que habría generado una sobrecarga sobre el profesorado y la infraestructura universitaria, lo que resultó en una caída de la calidad del trípode investigación, docencia y extensión (PSOL, 2007). En lo que respecta al PROUNI, lo tildaron de símbolo de la privatización de la educación superior, en vista de que los recursos del gobierno federal eran canalizados a las instituciones privadas como contrapartida por la concesión de becas a estudiantes de bajos ingresos. Por último, en cuanto al FIES, lo acusaban de funcionar como un mecanismo de endeudamiento para los estudiantes pobres, con el Estado financiando un nuevo instrumento para potenciar las ganancias de las instituciones privadas.

Tales críticas no carecían de fundamentos importantes, en la medida en que la expansión de la educación superior avanzó —durante los gobiernos de Lula y Dilma—, en paralelo al proceso de mercantilización de las actividades educativas, con una gran parte del aumento del ingreso de los sectores de menor poder adquisitivo que también estaba directamente ligado al crecimiento del sector privado. Así, se expandió densamente la red de cursos a distancia, y al igual que en otros segmentos de las políticas públicas gubernamentales, los gobiernos del PT no establecieron una ruptura total con las políticas de mercantilización y financiarización, ya presentes desde antes del gobierno neoliberal de Fernando Henrique





Cardoso (Cunha y Miebach, 2024). Sin embargo, la evaluación de los avances y límites de las políticas petistas no puede aislarse del contexto general en el que fueron aplicadas, ya que el gobierno contaba con una base de izquierda minoritaria en el Congreso Nacional –sólo obtenía mayoría al activar el conjunto de una coalición más amplia que congregaba una diversa gama de partidos conservadores– y una serie de compromisos que le otorgaban sustentación política y electoral para mantener la gobernabilidad.

Por otro lado, sectores de derecha también exploraron la crítica a la supuesta reducción de la calidad de las universidades públicas. Mientras, la argumentación de la “oposición de izquierda” insistía en la necesidad de más recursos para compatibilizar la estructura de las universidades públicas con el creciente ingreso de nuevos estudiantes, el alegato de los sectores reaccionarios se concentraba en la crítica a la supuesta falta de equidad en los exámenes de ingreso con la introducción de las cuotas sociales y raciales, de esta forma, se reivindicaban métodos “meritocráticos” (Cavalcante, 2018). Así expresaban no sólo posicionamientos abiertamente reaccionarios, también el descontento de sectores de clase media y alta que tradicionalmente ocupaban los espacios de ingreso a los cursos de grado, así como los cuadros profesionales de las universidades públicas. Estos sectores servirían como base sólida para el reclutamiento por parte de movimientos juveniles reaccionarios que desempeñarían un papel importante en el proceso de radicalización de la derecha contra los gobiernos del PT. La Atlas Network, fundada por Anthony Fischer en 1981 y financiada por la United States Agency for International Development (USAID) y empresas estadounidenses, constituyó uno de los principales brazos de financiamiento de estos grupos de orientación neoliberal en Brasil, además, habría actuado directamente con el apoyo a cerca de 30 institutos defensores de las políticas de libre mercado (Kanaan, 2024). Entre estos grupos se encontraban Estudiantes por la Libertad (EPL) y el Movimiento Brasil Libre (MBL), directamente involucrados en las protestas de 2013 y en las manifestaciones a favor del *impeachment* de Dilma. Ambos grupos desempeñaron un papel fundamental en conducir la modificación de las orientaciones políticas de las manifestaciones, que rápidamente evolucionaron de protestas de sectores de ultraizquierda contra el alto costo del transporte público hacia movilizaciones

contra la corrupción y el gobierno de Dilma. Con la posterior ascensión de la Operación Lava Jato, ese escenario de énfasis en la cuestión de la corrupción se consolidaría en los actos sucesivos a favor del juicio político a la presidenta.

Ambos bloques, tanto la oposición de izquierda como la de derecha a los gobiernos petistas, tuvieron una participación fundamental en las protestas de junio de 2013, iniciadas por agrupaciones de la oposición de izquierda, que lideraban manifestaciones contra el aumento del precio del transporte público en algunas de las principales capitales brasileñas, las protestas pronto serían capturadas por las banderas de los sectores reaccionarios. Se multiplicaron las manifestaciones contra los escándalos de corrupción denunciados diariamente por los grandes medios corporativos, el gasto público dirigido a los megaeventos (Copa del Mundo y Juegos Olímpicos), en consecuencia, la violencia pasó a dominar el comportamiento de parte de los manifestantes. Grupos de extrema derecha comenzaron a hegemonizar las marchas y militantes del PT, del Partido Comunista de Brasil (PCdoB), del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y de otros movimientos de izquierda llegaron a ser expulsados o agredidos en algunas de las manifestaciones.

En ese escenario, los grandes medios desempeñaron un papel central en la reconfiguración del imaginario político nacional. Medios como Globo, Veja y Estadão alimentaron diariamente la idea de que los gobiernos petistas eran esencialmente corruptos, descalificando sus avances sociales y enfatizando escándalos –reales o fabricados– como el Mensalão y la Lava Jato. La espectacularización de la Operación Lava Jato creó un ambiente de demonización de la política y de criminalización selectiva del campo progresista, lo que preparó el terreno para el discurso de la “antipolítica”, que sería apropiado con radicalidad por la extrema derecha.

Los capítulos que siguieron a estos eventos son bien conocidos y ampliamente estudiados. Dilma Rousseff sería reelegida en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2014, aunque con una pequeña ventaja porcentual, pero acabaría destituida mediante un proceso de juicio político en 2016, en medio de un ambiente de creciente fuerza de la ofensiva reaccionaria en las calles, en el Congreso Nacional y en el debate político nacional.

En los años restantes, bajo la gestión de Michel Temer (2016-2018), el proceso de reversión de las reformas establecidas por el PT cobró fuerza en los más diversos ámbitos gubernamentales. La aprobación de la Enmienda Constitucional 95, que congeló las inversiones y gastos públicos federales por encima de la inflación durante un período de 20 años, afectó profundamente la capacidad presupuestaria del conjunto de las instituciones públicas, con evidentes reflejos en el ámbito de las instituciones de educación superior. Paralelamente, el debilitamiento de Petrobras, con el avance de la Operación Lava Jato y la disposición del gobierno de entregar el régimen de *partilha del presal* [un régimen contractual específico, n. del e.] a las petroleras de los países imperialistas, también afectó la anterior disposición de garantizar el 75% de las regalías del petróleo y el 50% del Fondo Social del Presal para la educación, así como el objetivo de destinar el 10% del producto interno bruto (PIB) a la educación.

Además, el gobierno avanzó en agendas antipopulares como la reforma laboral, la reforma previsional y la imposición del techo de gasto. En el ámbito educativo, ganó notoriedad el discurso de “guerra cultural” de la extrema derecha con propuestas como el proyecto “Escuela sin Partido”, así como la imposición de la Reforma de la Enseñanza Media, que reforzó la tercerización y flexibilización de los derechos laborales en el ámbito de la enseñanza secundaria y redujo la carga horaria de las asignaturas vinculadas a las ciencias humanas.

En un episodio que se convertiría en símbolo del oscuro período de persecución y ataque a las instituciones públicas de enseñanza, el rector de la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC), Luiz Carlos Cancelier, se suicidó en 2017 como acto de protesta contra los excesos de la Policía Federal en la Operación Ouvidos Moucos, que emulaba las fórmulas de la Lava Jato con conducciones coercitivas y humillación pública de los investigados, aun sin pruebas concluyentes ni sentencia condenatoria. Posteriormente, el tribunal declararían improcedentes las acusaciones que involucraban al rector en supuestas irregularidades en la conducción del programa Universidad Abierta de Brasil.

Cabe destacar que en ese ambiente de severos ataques a los profesores, gestores y alumnos de las universidades públicas –que en la visión de la extrema derecha, funcionarían como simples bastiones de la ideología de izquierda brasileña– se volvió común la práctica de movimientos juveniles reaccionarios de grabar videos ridiculizando la infraestructura, las actividades docentes incluso las movilizaciones políticas que ocurrían en los campus universitarios. Estas campañas ganaron tracción en las redes sociales, contribuyendo a la formación de una “burbuja” ideológica alimentada por desinformación y teorías conspirativas, que señalaban a la universidad pública como un lugar de “degeneración moral” y “marxismo cultural”.

Naturalmente, las universidades públicas brasileñas están lejos de ser centros de formación de cuadros marxista-leninistas, como puede constatar al examinar los planes de estudio de la mayoría de las carreras más renombradas en ciencias humanas de las principales universidades del país, que rara vez incluyen referencias incluso a los clásicos del marxismo. Por otro lado, la conversión masiva de amplios sectores de la izquierda y de la intelectualidad latinoamericana a los modismos posmodernos de hecho alteró los patrones históricos de organización de los movimientos estudiantiles, especialmente en el ámbito universitario. Como observó Urrego (2025), en diversas ocasiones, tales metodologías generan más problemas que avances en el proceso de organización de las actividades en los campus, como lo ejemplifica el caso brasileño, al adoptar un liberalismo comportamental de sesgo individualista, estos métodos contribuyen al fortalecimiento del discurso de la extrema derecha y debilitan a las entidades representativas de los movimientos estudiantil y sindical, sin ofrecer ningún beneficio concreto a la defensa de la ciencia, a la democratización del acceso a la educación superior o al carácter público y universal de la enseñanza.

Pero a la par de los ataques de la extrema derecha, sindicatos de docentes, funcionarios de las universidades y organizaciones estudiantiles tradicionales se movilizaron en defensa de la educación pública, a través de la ocu-

pación de escuelas y universidades por parte del movimiento estudiantil en todo Brasil, lo que simbolizó algunos de los estallidos de resistencia al oscurantismo en ascenso. Sin embargo, esto era sólo el comienzo de su proceso de ascensión, que alcanzaría su punto culminante con la elección de Jair Bolsonaro a la presidencia de la República a finales de 2018.

El ataque a la ciencia y a las universidades públicas en el centro de la agenda de la extrema derecha

El fenómeno del ascenso del bolsonarismo en Brasil resulta incomprensible si no se analiza a la luz de la radicalización de los movimientos de extrema derecha en el país, posterior a junio de 2013, dentro de una lógica centrada en la oposición a los gobiernos del PT y a sus políticas de inclusión social. Considerando que las universidades fueron uno de los principales sectores de la sociedad donde se estableció el enfrentamiento entre estas visiones –con el fortalecimiento del discurso de la “guerra cultural” de la extrema derecha contra lo que denominaba “marxismo cultural”–, no sorprende que se convirtieran en un blanco prioritario de la política de dismantelamiento y reversión de políticas públicas del gobierno de Jair Bolsonaro. A lo largo del proceso de movilización que lo condujo a la victoria electoral de 2018, fue recurrente el uso de alusiones a una supuesta “adoctrinación marxista” en universidades y escuelas, críticas a la figura y a la relevancia de Paulo Freire y la difusión de narrativas fantásticas, como la existencia de gastos públicos excesivos en la educación superior en Brasil. En esta línea, entre sus seguidores figuraban muchos que defendían propuestas como la revocación de la política de cuotas, la privatización de las universidades públicas, el cobro de matrículas y la imposición de lo que llamaban “desideologización” de los espacios educativos.

A lo largo de su mandato, el Ministerio de Educación estuvo marcado por sucesivos escándalos que generaron inestabilidad y frecuentes cambios en el liderazgo de la cartera. Entre los numerosos episodios se destacaron declaraciones como las del ministro Abraham Weintraub, quien acusó a las universidades federales de promover “balbúrdia” (desorden) y albergar núcleos favorables al consumo de drogas, comparándolas con una “cracolândia” (Carta Capital, 2019). En 2020, Carlos Alberto Decotelli





fue nombrado oficial de reserva de la Marina, quien ni siquiera llegó a asumir el cargo luego de revelarse que los títulos de doctorado y posdoctorado que afirmaba poseer no habían sido reconocidos por las instituciones extranjeras mencionadas. Su sucesor, Milton Ribeiro, sostuvo que la “universidad debería ser para pocos” (UOL, 2021), reafirmando una visión elitista según la cual la expansión del acceso a la educación superior habría provocado una pérdida de calidad, un discurso que negaba frontalmente los avances sociales de las últimas décadas.

Desde el primer mandato de Lula, el gobierno federal mantuvo la tradición de nombrar como rectores de las universidades federales a quienes resultaban más votados en las consultas a la comunidad académica, incluso sin obligación legal. Bolsonaro rompió con esa práctica y pasó a designar rectores según el alineamiento ideológico con su gobierno, muchas veces sin considerar no sólo el orden de la lista tríplice, sino –en algunos casos– nombrando gestores *pro tempore* cuando ninguna de las candidaturas era considerada satisfactoria. Según el relevamiento de Honorato y Souza (2023), entre las instituciones que tuvieron rectores nombrados sin ocupar las primeras posiciones de la lista tríplice –o sin siquiera figurar en ella– estuvieron: Universidad Federal del Valle del São Francisco (UNIVASF), Universidad de la Integración Internacional de la Luso-fonía Afro-Brasileña (UNILAB), Universidad Federal de Ceará (UFC), Universidad Federal de Espírito Santo (UFES), Universidad Federal de la Frontera Sur (UFFS), Universidad Federal de la Gran Dourados (UFGD), Universidad Federal del Reconcavo de Bahía (UFRB), Universidad Federal Rural del Semiárido (UFERSA), Universidad Federal del Triángulo Minero (UFTM), Universidad Federal de los Valles de Jequitinhonha y Mucuri (UFVJM), Universidad Federal de Río Grande do Sul (FGRS), Universidad Federal del Sur y Sudeste de Pará (UNIFESSPA), Universidad Federal de Paraíba (UFPB), Universidad Federal de Piauí (UFPI), Universidad Federal de Sergipe (UFS), Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), Instituto Federal de Río Grande do Norte (IFRN), Centro Federal de Educación Tecnológica de Río de Janeiro (CEFET-RJ), Universidad Federal de Itajubá (UNIFEI) y Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro (UNIRIO), entre otras.

Cabe destacar que el gobierno de Bolsonaro no sólo reprodujo la tradicional inclinación de la derecha

latinoamericana hacia políticas neoliberales de desmantelamiento del aparato público, también abrazó la retórica negacionista de la extrema derecha internacional, que pasó a atacar no sólo a sindicatos, movimientos sociales y partidos de izquierda, sino a instituciones donde históricamente los sectores conservadores también tenían influencia –incluso hegemonía– como es el caso de las universidades públicas y de las entidades vinculadas al desarrollo científico y tecnológico. En este sentido, durante la pandemia de coronavirus, Bolsonaro y sus seguidores negaron reiteradamente el riesgo a la salud pública representado por Covid-19. El presidente llegó a afirmar que se trataba de una “gripezinha” (gripecita), promovió medicamentos sin eficacia comprobada, demoró la compra de vacunas y atacó las medidas de distanciamiento social. Las universidades públicas, que concentraban la mayor parte de la producción científica y de la investigación sobre el virus, se convirtieron en blanco de esta campaña antiintelectual, ya que sus análisis y alertas confrontaban directamente el discurso oficial.

Los datos confirman el desmantelamiento en curso. En 2015, el monto ejecutado del PNAES era de mil millones BRL. En 2021, cayó a tan sólo 670 millones BRL. Los recursos destinados al FIES, al ProUni y a las becas de posgrado sufrieron recortes superiores al 50% en relación con los valores aplicados durante el auge de la política educacional petista (Pilatti *et al.*, 2022). Como señalaron Araújo y Macedo (2022), el propio Ministerio de Educación reconoció en 2022 un déficit de más de 11 mil personas en la fuerza de trabajo de las universidades públicas federales –3 729 docentes y 7 273 técnicos administrativos–, lo que afectó directamente la capacidad de funcionamiento de decenas de instituciones.

Aunque los recortes fueron generalizados, hubo una clara selectividad ideológica en algunas de las restricciones presupuestarias. En 2019, cuando el gobierno anunció un bloqueo del 30% en los gastos discrecionales de las universidades federales, las primeras afectadas fueron la Universidad de Brasilia (UnB), la Universidad Federal de Bahía (UFBA) y la Universidad Federal Fluminense (UFF). Coincidentemente, esas tres universidades habían sido sede de eventos promovidos por la Unión Nacional de Estudiantes (UNE) a inicios de ese mismo año, lo que indicaba, al menos, un sesgo de represalia política en la elección de los blancos (Araújo *et al.*, 2022).

En este contexto de desmantelamiento, el gobierno además promovió sucesivos ataques a las organizaciones estudiantiles y a las entidades de profesores y técnicos administrativos, a las que acusaba de estar “aparelhadas por la izquierda”. Al mismo tiempo, impulsaba propuestas como el programa Future-se, que preveía la adopción de mecanismos de financiamiento privado en las universidades federales y la flexibilización de la gestión pública, lo que generó una fuerte reacción de la comunidad académica.

Aunque nunca fue implementado plenamente, el programa simbolizó la intención del gobierno de someter a la universidad a la lógica del mercado. Otras propuestas promovidas por el bolsonarismo incluyeron el avance del *homeschooling* (educación en el hogar), la militarización de las escuelas mediante la expansión de las escuelas cívico-militares y el vaciamiento curricular de las ciencias humanas en la educación básica.

El ataque a la ciencia no fue una externalidad de la política de Bolsonaro, sino una pieza central de su lógica de gobernanza. Al negar la validez del método científico, desacreditar a los especialistas y recortar los recursos para la investigación, el gobierno operaba dentro de una lógica de desmantelamiento institucional y erosión de la confianza pública en las estructuras de producción de conocimiento. En este sentido, los ataques a las universidades públicas se articulaban con el intento de deslegitimar los mecanismos de crítica social, el debate informado y la diversidad de pensamiento.

No por casualidad, Brasil figuró entre los países con mayor tasa de mortalidad por Covid-19, a pesar de contar con un sistema público de salud de cobertura nacional (Sistema Único de Salud [SUS]), reconocido internacionalmente. La omisión del gobierno y su hostilidad hacia la ciencia contribuyeron directamente al agravamiento de la crisis sanitaria. Las universidades públicas, por el contrario, fueron protagonistas en las acciones para enfrentar la pandemia, promoviendo la producción de alcohol en gel, pruebas, vacunas, campañas educativas y estudios epidemiológicos, lo que acentuó el antagonismo entre estas instituciones y el núcleo ideológico del bolsonarismo.

Al final del gobierno, la suma de recortes, persecuciones, nombramientos autoritarios y ataques discursivos había generado un ambiente de asfixia para la educación superior pública. No obstante, ese mismo proceso alimentó, por contraste, la formación de un amplio frente de resistencia. Profesores, estudiantes, técnicos y diversos sectores de la sociedad civil pasaron a identificar a las universidades como espacios representativos de la oposición a la barbarie y a la mentira institucionalizada. En las elecciones de 2022, ese sentimiento tuvo un papel crucial: en medio de una polarización extrema, la comunidad académica –duramente atacada a lo largo de cuatro años– desempeñó un papel activo en la defensa de la democracia, promovió debates, manifestaciones y movilización electoral. La oposición al gobierno de Bolsonaro, inicialmente más restringida a los sectores de izquierda y a los movimientos sociales, se amplió con la adhesión de amplios sectores académicos, sindicales, científicos y culturales, de distintas vertientes del espectro político, que vieron en la elección de Lula un medio para revertir el proceso de destrucción en curso.

La victoria electoral de 2022 no cerró el ciclo de enfrentamiento, pero permitió el inicio de un nuevo período de reconstrucción.

El conflicto con la extrema derecha sigue vigente, pero los años de resistencia consolidaron una base sólida de defensa de la universidad pública, de la ciencia y del conocimiento como instrumentos de emancipación y soberanía nacional. El ataque sufrido por las universidades no fue sólo presupuestario: fue simbólico, estructural e ideológico. Por ello, la respuesta también necesitó ser política, colectiva y persistente.

Una vez más, la historia se repite como farsa. Aludiendo al discurso de reivindicación del legado de la dictadura militar (1964-1985), Jair Bolsonaro incorporó de ella todo lo que tenía de más sumiso a los intereses extranjeros y de anticomunismo radical, ahora reciclado en forma de ataques indiscriminados a partidos socialdemócratas y social liberales, a sindicatos y a movimientos sociales. Sin embargo, renunció a cualquier similitud con el proyecto desarrollista –si bien fue autoritario y antipopular– de los antiguos militares, aplicó un programa económico neoliberal *in natura*, promovió una política exterior que perjudicaba los intereses de la propia burguesía brasileña, en consecuencia, profundizó la desindustrialización nacional y colocó el ataque a la ciencia, a la educación y a la cultura en el centro de su agenda político ideológica.

En este sentido, el bolsonarismo expresó la forma más acabada de la nueva extrema derecha brasileña: un proyecto que ostenta un discurso de anticomunismo radical y fachada nacionalista, pero que en la práctica aplica medidas que sacrifican no sólo los derechos y los intereses históricos de la clase trabajadora, sino de sectores de la propia burguesía nacional. Fue esa política sectaria, destructiva e irracional la que pavimentó los fundamentos del frente amplio que vendría a derrotar a Bolsonaro en las elecciones de 2022.

Como ha afirmado de forma reiterada –y con razón– José Dirceu, la victoria electoral de Lula fue posible gracias al voto decisivo de la clase media de derecha contraria al negacionismo, sectores que, aunque ideológicamente distantes del campo progresista, fueron directamente afectados por la radicalización autoritaria, anticientífica y reaccionaria del gobierno de Bolsonaro. El bolsonarismo, al elevar la guerra contra la ciencia, las universidades y los espacios de pensamiento crítico a un nivel institucional, tensionó los límites del liberalismo conservador, es decir, obligó a sectores históricamente reticentes al





campo democrático popular a comprometerse con la defensa de la institucionalidad democrática.

A partir de ello, Lula pudo estructurar una coalición electoral y política de amplitud inédita, que reunía desde partidos de izquierda y movimientos sociales hasta sectores del empresariado, del funcionariado público y de la élite cultural brasileña. Ese frente amplio no sólo derrotó al bolsonarismo electoralmente, también impidió –con respaldo institucional y movilización popular– el intento de golpe de enero de 2023.

Sin embargo, la propia heterogeneidad de esa coalición impuso límites estructurales. Si bien fue eficaz para frenar el avance de la extrema derecha, generó impases en torno a la capacidad del nuevo gobierno para reconstruir una agenda que no sólo contuviera al bolsonarismo, sino que enfrentara de forma consecuente al neoliberalismo y permitiera avanzar hacia un nuevo ciclo de fortalecimiento de la educación superior pública brasileña. Los desafíos, por tanto, no se agotan con la derrota electoral de Bolsonaro: implican el reposicionamiento del Estado en favor de la inversión científica, la valorización de la universidad pública y la recuperación de un proyecto nacional de desarrollo que devuelva al conocimiento, la justicia social y la soberanía el lugar central en las prioridades del país.

Referencias

- ANDIFES [Asociación Nacional de los Dirigentes de las Instituciones Federales de Enseñanza Superior] (2016). *IV Pesquisa nacional de perfil socioeconômico e cultural dos(as) graduandos(as) das ifes*. ANDIFES. Disponible en: <https://www.andifes.org.br/wp-content/uploads/2021/07/IV-Pesquisa-Nacional-de-Perfil-Socioeconomico-e-Cultural-dos-as-Graduandos-as-das-IFES.pdf>
- Araújo, M. A. D. y Macedo, M. N. (2022). *O desmonte da educação superior no governo Bolsonaro*. Encontro Brasileiro de Administração Pública. Disponible en: <https://sbap.org.br/ebap-2022/358.pdf>
- Carta Capital (23 de setembro de 2019). *Abraham Weintraub diz que universidades federais “têm cracolândia”*. CartaCapital. Disponible en: <https://www.cartacapital.com.br/educacao/abraham-weintraub-diz-que-universidades-federais-tem-cracolandia/>.
- Cavalcante, S. (2018). *Classe média, meritocracia e corrupção*. Crítica Marxista, 25(46), 103-125.
- CNTE [Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação]. (18 de abril de 2022). *Matrículas no ensino superior mais que dobram entre 2002 e 2015*. CNTE. Disponible en: <https://cnte.org.br/noticias/criancas-entre-5-e-9-anos-fora-da-escola-tem-maior-crescimento-em-14-anos-5736>.
- Cunha, A. M. y Miebach, A. D. (10 de abril de 2024). *Lula e o ensino superior*. A Terra é Redonda. Disponible en: <https://aterraeredonda.com.br/lula-e-o-ensino-superior/>
- FUNDEB [Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação] (2020). *Relatório de gestão-resultados da gestão FUNDEB*. Disponible en: <https://sites.google.com/view/relatriodegestao/resultados-da-gest%C3%A3o/financiamento-ed-b%C3%A1sica/fundeb>
- Honorato, D. y Souza, K. R. (15 de setembro de 2023). *A escolha “democrática” de dirigentes das universidades federais brasileiras: As nomeações no governo Bolsonaro*. Revista Hipótese, 9(0), e023005. Disponible en: <https://doi.org/10.58980/eiaerh.v9i00.428>
- INEP [Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira] (2016). *Censo da educação superior 2015: resumo técnico*. INEP. Disponible en: https://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2015/resumo_tecnico_censo_educacao_superior_2015.pdf
- Instituto Lula. *Legado-Brasil da mudança*. Disponible en: <https://www.institutolula.org/legado/brasil-da-mudanca/avancos-sociais/educacao>
- Kanaan, G. L. (maio de 2024). *Imperialismo e guerra híbrida: Uma análise da participação dos EUA no golpe de 2016 a partir dos telegramas da embaixada norte americana no Brasil vazados pela Wikileaks*. Anais do Simpósio ANPUH. Universidade Federal Fluminense. Disponible en: https://anpuh.org.br/uploads/anais-simposios/pdf/2024-05/1716451200_1989f3f2a155d-5027234912d54ea9961.pdf.
- PT [Partido dos Trabalhadores] (19 de noviembre de 2021). *Ninguém cuidou da educação como o PT. Lembre 18 ações na área*. PT. Disponible en: <https://pt.org.br/ninguem-cuidou-da-educacao-como-o-pt-lembre-18-acoes-na-area>
- PSOL [Partido Socialismo e Liberdade] (30 de noviembre de 2007). *Barrar o REUNI, defender a universidade pública, gratuita e de qualidade*. PSOL. Disponible en: <https://psol50.org.br/barrar-o-reuni-defender-a-universidade-publica-gratuita-e-de-qualidade/>
- Pilatti, L. A., Lievore, C., Rubbo, P. y Herrera Cantorani, J. R. (2022). *As demandas das universidades federais brasileiras para o quadriênio 2023/2026*. Avaliação (Campinas; Sorocaba), 27(3), 553-570.
- UOL Educação (10 de agosto de 2021). *Ministro da Educação defende que universidade deveria ser para poucos*. UOL. Disponible en: <https://educacao.uol.com.br/noticias/2021/08/10/ministro-da-educacao-defende-que-universidade-deveria-ser-para-poucos.htm>
- Urrego, M. Á. (2025). *La universidad colombiana: entre viejos problemas y las promesas de reforma en un nuevo contexto político*. Universidades, 76(103), 41-51.